

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

FRENTE UNIDO DE POLICIAS ORGANIZADOS*
DE PUERTO RICO, INC. (FUPO); CONCILIO *
NACIONAL DE POLICIAS, INC, (CONAPOL), *
POR SI Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS *
MIEMBROS JOSE L. MANGUAL DIAZ, *
ROBERTO FERREIRA GARCIA, *
ROLANDO CRUZ PEREZ, WILFRED ROSARIO *
MILAN, RAMON LOPEZ OTERO, *
HECTOR MORALES MORALES, ANGEL *
ROBLES GERENA, JORGE TORRES ALSINA, *
FERNANDO SOLER BETANCOURT, EMILIO *
COLON FUENTES, ROLAND ALVARADO *
BURGOS, RAFAEL CIORDIA SEDA, A, B, C *
Y D, ET ALS. *

CIVIL NUMERO: KAC 2007-4170
SALA: 508

SOBRE: SENTENCIA
DECLARATORIA

DERECHOS CONSTITUCIONALES
COBRO DE DINERO, DERECHOS
CIVILES, LEYES ESPECIALES,
DAÑOS Y PERJUICIOS

VS.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO *
POLICIA DE PUERTO RICO, PEDRO TOLEDO *
DAVILA, SUPERINTENDENTE DE LA POLICIA *
EN SU CARÁCTER OFICIAL, FULANO DE TAL *
E, F, G, H, ET ALS. *

07 MAY 24 PM 2:58

DEMANDA ENMENDADA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, por conducto de las representaciones legales que suscriben y muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

I. JURISDICCIÓN

1. Esta es una acción civil al amparo de la Regla 59 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 59, que dispone que el Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas que se insten o puedan instarse otro remedio, cuando tales derechos, estados u otras relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, ordenanza municipal, contrato o franquicia.
2. Que se invocan, en sus partes atinentes, las siguientes: Constitución Federal de los Estados Unidos de América; Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Ley número 53 del 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como la Ley de la Policía de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. 3111 y 3112, en específico lo relacionado a la enmienda a dicha Ley mediante la Ley Número 227 del 23 de agosto de 2004, Ley de Aumentos del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico; Ley Número 12 del 8 de agosto de 1974, según enmendada, Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico; Ley

Número 184 del 3 de agosto de 2004, Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Ley Número 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. 2173; y el Código Civil de Puerto Rico, Artículo 1802 (31 L.P.R.A. Sec. 5141).

II. INTRODUCCION

1. La Exposición de Motivos de la Ley de la Policía de Puerto Rico, supra, enuncia claramente dos asuntos fundamentales: 1) un reconocimiento de la labor del Cuerpo de la Policía; y 2) la necesidad de crear un Nuevo estatuto habilitador que se ajustase a las necesidades y realidad de dicho Cuerpo:

“El Gobierno de Puerto Rico, a través del Programa Mano Dura contra el Crimen, implantado principalmente por la Policía de Puerto Rico, ha alcanzado durante los últimos tres (30) años logros significativos en la lucha contra la incidencia criminal. El Pueblo de Puerto Rico, en agradecimiento al genuino esfuerzo demostrado por el Cuerpo de la Policía, ha premiado a éstos con el apoyo y el respeto que merecen...”

Nunca antes en la historia, la Policía de Puerto Rico había enfrentado retos tan grandes, como durante los últimos diez (10) años. Debido al aumento constante de año a año de la incidencia criminal, hasta hace pocos años nuestro pueblo pareció perder la esperanza...

A esos fines, la presente legislación persigue los propósitos de darle uniformidad a la estructura operacional de la Policía para hacer más ágil su administración y la utilización de sus recursos...”

2. En el Artículo 12 de la Ley de la Policía de Puerto Rico, supra, se estableció claramente todo lo relacionado a la composición y uniformidad del Sistema de Rango que se aplicaría a dicho Cuerpo. Conforme a ello, los miembros de dicho Sistema, dentro del cuerpo policiaco, ostentarían los siguientes rangos: Cadete, Agente de la Policía, Sargento, Teniente Segundo, Teniente Primero, Capitán Inspector, Comandante, Teniente Coronel y Coronel.
3. Por otra parte, en el Artículo 13 de la referida Ley Núm. 53, supra, se estableció cuales serían las escalas de retribución mensual que aplicarían a cada uno de los rangos dentro de la Policía de Puerto Rico, a partir del 1ro de julio de 1996.
4. La realidad y las condiciones sociales concernientes al problema de la criminalidad en Puerto Rico que fueran reconocidas en la Ley Núm. 53 del 10 de junio de 1996, se han

erosionado considerablemente. No obstante, ello pragmáticamente se debe admitir que los miembros de la Fuerza Policial continúan ejerciendo funciones revestidas de un alto grado de responsabilidad, en aras de proseguir con su derrotero de brindar protección a la ciudadanía, a la propiedad, procurando siempre mantener el orden público, previniendo y persiguiendo el crimen y sus autores.

5. El legislador reconociendo que las funciones y responsabilidades de estos funcionarios son ejecutadas cabalmente por un excelente equipo de servidores que día a día asumen con encomiable valor y gran sentido del deber, los riesgos y dificultades inherentes a su profesión, en vías de hacerles justicia, enmendó, mediante la Ley Número 227 de 2004, el Artículo 12, inciso (a) de la Ley Núm. 53 de 1996, a los fines de que lea como sigue:

"Artículo 1.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 12 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, para que se lea como sigue:

"(a) Esta Ley se conocerá como "Ley de Aumento de los Miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico".
A partir del 1ro de octubre de 2004, las escalas de retribución de los miembros de la policía serán las siguientes:

ESCALAS DE RETRIBUCIÓN MENSUAL PARA LOS RANGOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICIA DE PUERTO RICO													
Categoría	Basico	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Max.
CADETE	1718	1744											1770
AGENTE	2100	2132	2163	2196	2229	2262	2296	2331	2366	2401	2437	2474	2511
SARGENTO	2182	2215	2248	2282	2316	2351	2386	2422	2458	2495	2532	2570	2609
TENIENTE SEGUNDO	2264	2316	2369	2424 2480	2537	2595	2655						2716
TENIENTE PRIMERO	2379	2434	2490	2547	2606	2665	2727	2789					2854
CAPITAN	2590	2668	2748	2830	2915	3003	3093	3185					3281
INSPECTOR	2650	2730	2811	2896	2983	3072	3164	3259					3357
COMANDANTE	2753	2836	2921	3008	3099	3191	3287	3386					3487
TENIENTE CORONEL	2929	3017	3107	3201	3297	3396	3497	3602					3710
CORONEL	3143	3237	3334	3434	3537	3644	3753	3865					3981

*Nota del editor: Error en la tabla según aprobada y publicada- El segundo número 2480 duplicado en la columna 3 de Tenientes Segundo debe pertenecer a la columna 4 y los siguientes salarios de esa categoría deben moverse una columna hasta completar la columna 7.

ESCALA SOBRE EL TIPO MÁXIMO TIPOS SOBRE EL MÁXIMO													
Categoría	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CADETE	1796	1851	1879										
AGENTE	2548	2587	2625	2665	2705	2745	2787	2828	2871	2914	2958	3002	3047
SARGENTO	2648	2688	2728	2769	2810	2853	2895	2939	2983	3026	3073	3119	3166
TENIENTE SEGUNDO	2778	2842	2907	2974	3043	3113	3184	3258	3332				
TENIENTE PRIMERO	2919	2986	3055	3125	3197	3271	3346	3423	3502				
CAPITAN	3379	3481	3585	3693	3804	3918	4035	4156	4281				
INSPECTOR	3458	3561	3668	3778	3892	4008	4129	4252	4380				
COMANDANTE	3592	3700	3811	3925	4043	4164	4289	4418	4550				
TENIENTE CORONEL	3822	3936	4054	4176	4301	4430	4563	4700	4841				
CORONEL	4101	4224	4351	4481	4616	4754	4897	5004	5195				

6. El Artículo 12, inciso (c), de la Ley habilitadora de la Agencia, es tajante al establecer claramente la prohibición de crear "cualquier rango, clasificación o clasificación

especializada para los miembros de la Policía que no sean los dispuestos en esta Ley.”

Asimismo en el Inciso (b) del mismo artículo dispone lo siguiente:

“(b) La Policía de Puerto Rico estará constituida en un sistema de organización unificada en el cual el Superintendente determina el mejor uso de los recursos humanos según se dispone en el Artículo 5, inciso (d) de esta Ley.”

7. La Ley 227, supra, proveyó para un aumento a dos mil cien (\$2,100.00) dólares mensuales el tipo básico de la escala salarial para el rango de Policía o Agente y a su vez otorgó un aumento de doscientos veinticinco (\$225.00) dólares a los miembros de la Fuerza, a partir del Rango de Policía o Agente, efectivo al 1ro de octubre de 2004. Asimismo, en dicho estatuto se proveyó para un aumento de cien (\$100.00) dólares, efectivo al 1ro de octubre de 2005, en el tipo básico de la escala salarial del Policía o Agente, elevándose el mismo a dos mil doscientos (\$2,200.00) dólares mensuales a partir de esa fecha. A su vez, al 1ro de octubre de 2005, todos los miembros activos del Sistema de Rango de la Policía recibirían un aumento de cien (\$100.00) dólares, a partir del rango de Policía o Agente.
8. Nótese de inmediato que a pesar de estar la Policía de Puerto Rico estructurada estatutariamente como un ente de un Sistema organizacional unificado, cimentado en un Sistema de Rango, y no empece a existir una prohibición contundente sobre “la creación de cualquier rango, clasificación o clasificación especializada para los miembros de la Policía que no sean los dispuestos” en la Ley regente de la Fuerza Policial, la “nueva” legislación que concede aumentos en las escalas salariales excluyó de los mismos el Rango de cadete, creándose con ello, un Sistema de Rango distinto al establecido por la ley orgánica, desestabilizándose el Sistema unificado previamente establecido.
9. Que no obstante, a las facultades, atribuciones y deberes conferidas al señor Superintendente mediante la letra de la propia Ley Núm. 53 de 1996, supra, específicamente en sus Artículos 5 y 6; no empece a las regulaciones sobre retribución salarial establecidas en la Ley Núm. 184 del 3 de agosto de 2004, supra, y no obstante, habérsele requerido a éste la aplicación de estos aumentos, el mismo no ha realizado esfuerzos o encaminado iniciativa alguna dirigidas a aplicar con todo vigor y plenitud lo esbozado en la Ley Núm. 227 de 2004, supra.

III. MARCO CONCEPTUAL DE LA PRESENTE ACCION CIVIL

1. Se invoca la jurisdicción de este Honorable Tribunal mediante el presente Recurso de Sentencia Declaratoria, dado la existencia de una controversia sobre un derecho no

conferido al Rango Cadete y si concedido a los demás componentes del Sistema de Rango. Adicionalmente, se peticiona la intervención de este Honorable Tribunal en cuanto a la interpretación y/o validez de la Ley Núm. 227 de 2004, supra, bajo la certeza de que con ella se habrá de poner fin a la controversia, se despejará la incertidumbre, vindicándose los derechos de aquellos miembros de la Fuerza Policial que se hayan visto o puedan verse afectados.

2. Que debe quedar claro que la inobservancia y falta de implantación aplicación de la Ley Núm. 227 de 2004, supra, por parte del Superintendente de la Policía, ante una legislación de efectividad inmediata y para la cual el legislador tomó en consideración el impacto presupuestario (se estima que al 1ro de octubre de 2004, el impacto final del aumento sería de unos cuarenta y tres millones seiscientos noventa y cinco mil doscientos cuatro dólares (\$43, 695,204.00), sumado a un impacto adicional de tres millones ochocientos cincuenta y cinco mil ochocientos cuatro dólares (3,855,804.00), producto del movimiento horizontal que reflejan las escalas) crea un inminente, palpable y real desconocimiento a los efectivos de la Fuerza Policiaca del País que se ven afectados por tales acciones u omisiones.
3. Que la parte demandante acude ante este Honorable Tribunal en busca de protección, bajo el fundamento de que la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, mejor conocida como L.P.A.U., dispone en su Artículo 4.3 que:

“Sec. 4.3 Revisión – Agotamiento de remedios administrativos; relevo 93 L.P.R.A. sec. 2173)

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que agotar alguno o todos los remedios administrativos provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento resultara en un daño irreparable al promovente y en balance de intereses no se justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar los remedios administrativos por la dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia administrativa”.

También reiteradamente se ha dispuesto, tanto por ley como por jurisprudencia, que es improcedente el agotar los remedios administrativos cuando se trata de una violación de derechos civiles y exista un agravio de evidente intensidad a derechos constitucionales y estatutarios que amerite urgente reparación.

En todos aquellos casos en los cuales el ejercicio del procedimiento administrativo constituya una gestión fútil, inútil, inapropiada e inefectiva, como en el caso que nos ocupa, se debe obviar el agotamiento de remedios administrativos, previniéndose así con la intervención en tiempo del Tribunal, que se produzca y/o se prolongue la

existencia y continuidad de un daño inminente, material, sustancial y real, no hipotético ni especulativo.

IV. "STANDING" DE LA PARTE DEMANDANTE

1. El Frente Unido de Policías Organizados, Inc., en adelante, F.U.P.O. y el Concilio Nacional de Policías (CONAPOL), Inc., en adelante CONAPOL, son corporaciones sin fines de lucro, creadas al amparo de la Ley de Corporaciones de Puerto Rico, cuyas funciones están contenidas en su Certificado de Incorporación. Véase Anejo I y II. Entre dichas funciones esenciales se encuentra el velar y proteger los intereses de los socios a quienes representan en esta causa de acción. Véase Anejo I y II, respectivamente. La F.U.P.O. y CONAPOL, comparecen en la presente demanda enmendada, por si y en representación de sus miembros *bona fide*, los cuales se relacionan en los Anejos III y IV.
2. A y B representan aquellas partes demandantes que como persona tengan o aleguen tener interés alguno que pueda verse afectado por la determinación que en su día emita este Honorable Tribunal. Todos sus nombres serán notificados oportunamente.
3. C y D representan a las partes demandantes que como personas, al momento de la presentación de la presente causa de acción, se encuentren fuera de la agencia por motivos de jubilación, acción disciplinaria o cualquier otra razón, y que como persona tengan o aleguen tener interés alguno que pueda verse afectado por la determinación que en su día este Honorable Tribunal emita. Sus nombres serán informados oportunamente.

V. PARTES DEMANDADAS

1. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es la entidad jurídica que responde por las acciones u omisiones y actividades ilegales, inconstitucionales, negligentes y/o dolosas del ente político que le antecedió, así como de sus instrumentalidades, dependencias, departamentos, funcionarios y empleados públicos, como lo es el caso de la Policía de Puerto Rico, aquí demandada.
2. El Lcdo. Pedro A. Toledo Dávila, Superintendente de la Policía de Puerto Rico, aquí demandado en su carácter oficial, por ser quien tiene a su cargo la dirección y administración inmediata de la Agencia concernida y el Gobernador de Puerto Rico, quien es la autoridad suprema en cuanto a la dirección de la Policía de Puerto Rico.

VI. PRACTICAS ILEGALES E INCONSTITUCIONALES EN CONTRA DE LOS DEMANDANTES

1. La parte demandada infringió e interfirió con derechos constitucionales y estatutarios dispuestos tanto en la Constitución de los Estados de América y en la Constitución del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como en aquellas leyes y reglamentos previamente mencionados y/o aplicables a los hechos de este caso.

2. La parte demandada violó y continúa violando los derechos de los demandantes al no cumplir con la Ley Numero 227 de 23 de agosto de 2004, al no señalar las contraposiciones de ésta con la Ley Número 53, supra, con el Sistema Organizacional unificado y con el Sistema de Rango y al negarse a procesar los requerimientos de pago, con propósitos claramente ilegales, incumpliendo y violando adrede, con intención, las áreas esenciales del Principio de Mérito (Ley 184 de 2004, supra), así como el Sistema de Retribución allí dispuesto y reconocido.
3. En síntesis, la parte demandada viola los derechos de los aquí demandantes al no honrarles y/o concederles los aumentos de sueldo según están dispuestos o debieron disponerse, conforme a la Ley 227 de 2004, supra, lo cual constituye un interés propietario debidamente conferido por ley.
4. Que la omisión del Legislador, al dejar fuera del estatuto a cualquier miembro del Sistema de Rango, constituye una violación a la Cláusula de Igual Protección de las Leyes, Artículo II, Sección 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y constituye además, una violación al derecho de los demandantes a recibir Igual Paga por Igual Trabajo, conforme establecido en el Artículo II, Sección 16 de nuestra Constitución, asunto que debe ser reivindicado judicialmente.
5. Debe puntualizarse que el hecho de que la Ley 227 de 2004, supra, comience la escala de retribución mensual para el sistema de rango policía con el rango de Policía o Agente, constituye indubitamente una violación a la Igual Protección de las Leyes, ya que se afectan ambos rangos, porque al Cadete no se le incluyó en la escala y porque al policía o Agente se le ubica en una escala inferior, siendo esa posición la que le correspondería al Cadete, ubicándose subsiguientemente en el orden de Rango según van en aumento los niveles en la escala. Esto fáctica y lógicamente afecta derechos adquiridos.
6. Todos aquellos miembros que constituyen el Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico, que hayan sido o pudiesen ser objeto de retribución a partir de entrar en vigor la Ley 227 de 2004, supra, ya fuera por pasos por mérito y/o pagos suplementarios o cualquier otro, se ven afectados a consecuencia de una ubicación incorrecta en el escalafón.
7. Que los daños de que trata la presente causa de acción son continuos y sucesivos, cuya ocurrencia surge de mes a mes. Que en vista de que son aumentos consecutivos

en períodos distintos de tiempo, los daños sufridos por los demandantes son claros e inminentes, materiales y sustanciales, no hipotéticos o especulativos.

8. Que por tratarse de una exclusión en la disposición legal de un ente con derecho, por ser el Cadete el primer rango o categoría en el Sistema de Rango, tal omisión, intencional o negligente, no puede ser suplida o subsanada por el Superintendente, por lo cual la Agencia carece de jurisdicción para entender sobre esta controversia. Interpretar el estatuto, su corrección o inconstitucionalidad, si alguna, es un ejercicio de estricta competencia judicial. Siendo así, menos aun es requerible la pericia administrativa. En contra, debemos precisar que el solicitar a la Legislatura la corrección del estatuto es un acto competente al Superintendente en la ejecución de lo que sería una administración eficaz. Mas sus ejecutorias distan de ello, puesto que no reflejan una actuación administrativamente correcta, compatible con lo que un Jefe de Agencia debió detectar, prever y requerir en este caso, entiéndase, solicitar presurosamente a la Legislatura la corrección de la omisión en el estatuto.
 9. Que la inacción del Superintendente al no requerir a la Legislatura la corrección de la norma (Ley 227 de 2004, supra, para que la misma fuese aplicada correctamente, constituye una violación de los derechos civiles de los demandantes y un agravio continuo y de patente intensidad a sus derechos constitucionales y estatutarios, ya señalados.
 10. Que para vindicar una violación sustancial de derechos constitucionales y civiles, el cause administrativo resulta un ejercicio fútil, inútil, ineficaz y sin garantía de que se provea remedio adecuado alguno. Tratándose de una dilación irrazonable y extrema de parte del señor Superintendente, al evadir y soslayar una petición de corrección de la ley, corresponde a este Honorable al augusto Tribunal hacer valer los derechos de los miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico.
 11. Que por los fundamentos que anteceden se obvió el acudir ante la Comisión Apelativa del Sistema de Recursos Humanos para el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en busca de un remedio.
- VII. PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN: VIOLACIONES A LA CONSTITUCION DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO Y OTROS ESTATUTOS**
1. Se reproducen todas las alegaciones anteriores y todas las alegaciones relacionadas en las subsiguientes causas de acción.
 2. La parte demandada violó mediante sus acciones y/u omisiones y directrices no emitidas, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Ley de Derechos

Civiles de Puerto Rico, la Ley de la Policía de Puerto Rico, la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley de Aumento al Sistema de Rango de la Policía y el Reglamento de Personal de la Policía de Puerto Rico.

3. Que por existir en este caso violaciones de orden constitucional, tales actuaciones constituyen una degradación de la dignidad del ser humano y del trabajador de carrera que prominentemente tiene a su cargo la responsabilidad de la seguridad del Pueblo de Puerto Rico.
4. Que las actuaciones de la parte demandada constituyen inequívocamente una violación a la cláusula sobre la Igual Protección de las Leyes y un discrimen, claro impermisible e incompatible, con los postulados esenciales de la igualdad humana, (Véase la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Secciones 1 & 7).
5. Que las actuaciones de la parte demandada menoscaban derechos adquiridos de interés propietario del trabajo de los demandantes, de sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad, a la propiedad y al debido proceso de ley, derechos garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Sección 7.
6. Que las actuaciones de la parte demandada privan a los demandantes de su derecho fundamental al trabajo, negándoles ascensos, promoviendo descensos y entorpeciendo su cabal desarrollo e integración efectiva en el mercado de empleo (Véase la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Secciones 7 & 19).
7. Que las actuaciones de la parte demandada privan a los demandantes de un sistema democrático de vida fundamental en la comunidad puertorriqueña de su derecho a disfrutar de un nivel de vida adecuado, que asegure para sí y para los suyos la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; de su derecho a protección social en la enfermedad, la vejez o la incapacidad física y de su derecho a la libertad integral (Véase la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Preámbulo, Artículo I Sección I, Artículo II, Secciones 19 & 20).

VIII. SEGUNDA CAUSA DE ACCION: ARTICULO 1802 DEL CODIGO CIVIL DE PUERTO RICO

1. Se reproducen todas las alegaciones anteriores, se hacen formar parte de y expresamente se incorporan a esta causa de acción y así también se hacen formar parte de y se incorporan todas las alegaciones relacionadas contenidas en las subsiguientes causas de acción.

2. En el Preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se consigna el propósito colectivo de organizar una sociedad "sobre una base plenamente democrática, promover el bienestar general y asegurar para nosotros y para nuestra posteridad el goce cabal de los derechos humanos..."
3. El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico dispone que "el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización." (31 L.P.R.A. 5141)
4. La parte demandada mediante sus agentes, funcionarios y empleados incumplió crasa y manifiestamente, los deberes categóricos de observar, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, constitucionales y civiles de todos los demandantes, impuestos en las disposiciones legales precitadas en la presente causa de acción. Ello al no llevar a cabo el descargo efectivo de sus funciones en relación a los aumentos provistos por ley y en relación a la óptima administración del Sistema de Retribución aplicable a la Policía de Puerto Rico.
5. La omisión del Superintendente de la Policía de Puerto Rico, al no corregir el error, conforme dispuesto en la Ley 227 de 2004, es conocida por la parte demandada y forma parte de un patrón sistemático de negar derechos retributivos a los miembros de la Fuerza Policiaca, sobre todo cuando tales actos son de carácter desmoralizante y afectan las ejecutorias del día a día de cada uno de estos empleados, así como su productividad y rendimiento.
6. Los daños sufridos por los aquí demandantes son el resultado natural, probable y lógico de los actos negligentes y culposos de la parte demandada; tales daños surgen como una consecuencia razonable y ordinaria de la práctica ilegal de los demandados y la violación de derechos descritos en la demanda.
7. Se impugna a su vez la constitucionalidad de cualesquiera leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que establezcan requisitos de notificación, cuantía e inmunidad de los funcionarios aquí demandados.

IX. DAÑOS

1. Se reproducen todas las alegaciones anteriores, se hacen formar parte de y expresamente se incorporan a los siguientes daños y perjuicios:
 - a. Pérdida de Ingresos por concepto de salarios no otorgados al quedar fuera de la escala o al quedar a un nivel distinto e inferior al correspondiente.

- b. La pérdida antes descrita adicionalmente representa un decrecimiento sustancial en el progreso económico y social que lesiona el margen del por ciento de cuantía en la Pensión de Jubilación.
- c. Se reclama cualquier retribución por concepto de pasos por mérito, pagos suplementarios y otros beneficios marginales relacionados y cuantificados oportunamente.
- d. Asimismo se reclama el daño moral resurgente y continuo por una suma estimada de **CINCO MILLONES DE DOLARES (\$5,000,000.00)**.

X. RECLAMACIÓN DE GASTOS, COSTAS Y HONORARIOS DE ABOGADO


- 1. La reclamación de gastos, costas y honorarios de abogado serán aquellos fijados por el Honorable Tribunal, conforme a la reglamentación aplicable para estos casos.

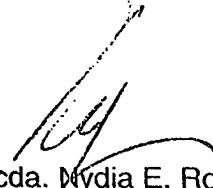
XI. SUPLICA

POR TODO LO CUAL, se solicita de este Honorable Tribunal declare HA LUGAR la presente causa de acción y en consecuencia ordene la inclusión del Rango de Cadete dentro de los aumentos legislados por la Ley 227 de 2004, con derecho al pleno disfrute de los mismos; que se hagan los ajustes correspondientes a los distintos niveles de la Escala de Retribución Mensual para el Sistema de Rango de los Miembros de la Policía de Puerto Rico y que una vez efectuados, se ordene a que se proceda con los ajustes de salario correspondientes a los demandantes conforme a las disposiciones de la Ley número 227 del 23 de agosto de 2004, supra. Asimismo se solicita al Honorable Tribunal que de entender que este pleito cualifica como un pleito de clase, lo certifique como tal. En adición, se solicita ordene que, en su día, se paguen las cuantías por concepto de daños reclamados, el pago de aquellas cuantías por concepto de daños reclamados, las cuantías de todos los intereses legales sobre cualquier cantidad dictada, así como el pago de costas, gastos y honorarios de abogado, junto con la emisión de cualquier otro dictamen o pronunciamiento que este Honorable Tribunal entienda procede en derecho.

Respetuosamente sometida.

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2007.


Lcdo. José F. Avilés Lamberty
Colegiado Número 8047
Mansiones de San Martin St. 17
San Juan, PR 00924-4586
Tel. 787-776-1358 / 787-406-9066


Lcda. Mydia E. Rodríguez Martínez
Colegiado Número 7346
P.O. Box 4155
Carolina, PR 00984-4155
Tels. 787-762-9292 / 787-649-3863
Fax 787-752-9292